



República de Colombia



Sala Cuarta de Decisión Laboral

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE
Magistrada Ponente

REFERENCIA: PROCESO ORDINARIO LABORAL - **SENTENCIA**
RADICACIÓN: 05 360 31 05 **002 2021 00125 01**
DEMANDANTE: DEGUIS DE JESUS OCAMPO FRANCO
DEMANDADO: JOHN MARIO GÓMEZ ARISTIZÁBAL

Medellín, once (11) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

En la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se reunió la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por las Magistradas LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, quien actúa como ponente, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 28 de junio de 2022, por el Juzgado 2° Laboral del Circuito de Itagüí, Antioquia.

I. ANTECEDENTES

Pretende el demandante que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 15 de mayo de 2019 y el 15 de febrero de 2021, el cual terminó por causas imputables al empleador, al incumplir sistemáticamente con sus obligaciones; en consecuencia, pide que se condene a la demandada al pago de las cesantías, los intereses a las cesantías y las primas de servicio causadas en el año 2021, el auxilio de transporte y las vacaciones de toda la relación laboral, y los aportes a seguridad social respecto de los periodos comprendidos entre mayo de 2019 y julio de 2020 y desde diciembre de 2020 hasta febrero de 2021; más las indemnizaciones de los arts. 64 y 65 del CST principalmente, y las de los arts. 5° del Decreto 116 de 1976 y

99 de la Ley 50 de 1990, junto con la indexación de las sumas adeudadas en forma subsidiaria (págs. 2, 3 arch. 2, págs. 3, 4 arch. 5 C01).

Como fundamentos fácticos relevantes, expuso que el 15 de mayo de 2019 se vinculó con el demandado para desarrollar labores como Despachador Vendedor y desempeñar oficios auxiliares en el establecimiento de comercio de propiedad del empleador ubicado en la Calle 54 # 50-21 de Itagüí, a cambio de \$1.000.000 como salario, más auxilio de transporte, horas extras y recargos; su horario fue de 7 am a 4 pm de lunes a sábado; fue afiliado en pensiones a Protección SA y en salud a la EPS Sura, sin embargo, nunca se efectuaron los pagos de los aportes, para lo cual reclamó el 2 de diciembre de 2020 ante la AFP para que ejecutara la acción de cobro correspondiente, y esta le respondió que en el sistema solo se registra una relación laboral y aportes desde agosto hasta noviembre de 2020.

Por tal motivo, ante el incumplimiento sistemático de las obligaciones que como empleador le correspondían al demandado, presentó renuncia motivada el 15 de febrero de 2021, en la que solicitó además, el pago de las acreencias laborales e indemnizaciones debidas, sin que a la fecha de presentación de la demanda haya recibido respuesta alguna, como tampoco de la reclamación inicial elevada al demandado el 2 de diciembre de 2020 (págs. 1, 2 arch. 2, págs. 2, 3 arch. 5 C01).

II. TRÁMITE PROCESAL

Previa subsanación, la demanda fue admitida mediante auto del 24 de mayo de 2021, ordenándose la notificación y traslado al demandado (arch. 9 C01), quien contestó con oposición a las pretensiones, bajo el argumento de que el vínculo laboral del demandante inició el 1º de julio de 2020; se le pagó 1 SMLMV y cumplió horario de 8 horas diarias con un día de descanso a la semana; lo afilió a la EPS Salud Total, a la ARL Sura, a la AFP Protección y a la Caja de Compensación Comfama, y efectuó el pago de los aportes respectivos sin hacerle los descuentos de nómina; fue liquidado el 30 de enero de 2021, día en el que el demandante firmó un paz y salvo, por lo que no era viable que presentara renuncia motivada con posterioridad a esa data. No propuso excepciones en su defensa (archs. 16, 20, 21 C01).

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado 2º Laboral del Circuito de Itagüí, Antioquia, en audiencia celebrada el 28 de junio de 2022, profirió sentencia en la que declaró que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 1º de julio de 2020 y el 30 de enero de 2021; en consecuencia, condenó al demandado al pago de los aportes en pensiones con destino a la AFP Protección SA en favor del demandante, previa liquidación que se efectúe por parte de la administradora, incluyendo los intereses moratorios, todo calculado sobre un IBC de 1 SMLMV entre julio de 2020 y enero de 2021; lo absolvió de las demás pretensiones incoadas en su contra e impuso costas a su cargo.

Para lo que interesa a la alzada, motivó la decisión en que solo registra un día de cotizaciones a seguridad social para marzo de 2020 a través de la empleadora Mónica Ocampo Duque, y para los meses de junio y julio de ese mismo año bajo el nombre de Camilo Andrés López, sin que de la prueba testimonial se pueda tener por acreditado el extremo inicial del vínculo laboral, pues el testigo Sebastián Holguín sostuvo que el demandante ingresó a laborar 8 meses después de él sin indicar fechas aproximadas, siendo esta la única prueba que revela una prestación del servicio por parte del actor, insuficiente para tener por probadas las fechas aducidas en la demanda.

Agregó que el segundo declarante solicitado por la parte demandante, no genera credibilidad alguna porque no mostró espontaneidad en su declaración, al punto que debió ser requerido en varias oportunidades para que su mirada no fuera desviada, generando un manto de sospecha respecto al conocimiento de los hechos relatados.

En relación con la data hasta la cual se ejecutó la prestación de los servicios el demandante, indicó que no hay otro medio probatorio distinto al de la liquidación final de prestaciones sociales, de la cual se pueda desprender que se dio más allá del 30 de enero de 2021, pues tal documento fue reconocido por el demandante en su interrogatorio de parte (arch. 27, 31 C01).

IV. RECURSO DE APELACIÓN

El **demandante** señaló que no se encuentra de acuerdo con lo decidido y la valoración probatoria realizada por cuanto acreditó con la documental, los testimonios e interrogatorio de parte, que el demandado seguía una política de informalidad de las relaciones laborales, que se celebró inicialmente un contrato en forma verbal y estando vigente ese vínculo, se usó la forma escrita para que los trabajadores firmaran los contratos, y solo a partir de allí empezaron a estandarizar los recibos de nómina y referenciaron a Mónica Duque como la persona de confianza del demandado, quien era la encargada de los temas de seguridad social, sin que la catalogaran como socia o empleadora u otra propietaria del establecimiento. Agregó que en el interrogatorio de parte confesó que no sabe leer, por ende, la firma que se encuentra impuesta en el paz y salvo, tal vez se debió a que se hubiera podido sentir coaccionado para firmar, aún sin conocer cuál era su contenido.

No obstante, dijo que no se valoró la reclamación efectuada en diciembre de 2020 donde se buscaba dejar una huella documental respecto del incumplimiento que venía notando por parte del empleador, lo que concuerda con que la renuncia se hubiera presentado en fecha posterior; se debe tener en cuenta que la época en la que dijeron los testigos haber laborado, era anterior a la fecha en que inició a prestar servicios para el demandado, por lo que no se discutió por parte de ellos lo relacionado con que el extremo temporal inicial se ubicó en mayo de 2019; en consecuencia, solicita se acceda a la totalidad de las pretensiones incoadas en la demanda.

Finalmente agregó que el testigo Anderson no puede tomarse como parcializado, porque lo que sucedió con él, es que los nervios lo tenían prácticamente paralizado, pero no estuvo manipulado de ninguna manera y luego de que pasó la etapa de nervios, fue bastante coherente en su declaración en cuanto a las fechas relatadas.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Recibidas las diligencias en esta Corporación, en providencia del 12 de enero de 2023 se admitió el recurso de apelación interpuesto en audiencia y conforme a lo normado en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, en auto del 12 de abril siguiente, se dispuso correr el respectivo traslado a las partes para alegar;

sin embargo, únicamente el demandante presentó sus alegaciones insistiendo en lo argumentado en la demanda y su recurso, empero indicó puntos adicionales a los sustentados dentro de audiencia (archs. 2-4 C02).

VI. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites de segunda instancia, sin causal de nulidad que invalide lo actuado, esta Colegiatura debe indicar inicialmente en relación con el memorial que obra en el archivo 4 del C02, que no se **admitirán** argumentaciones adicionales que el recurrente no expuso dentro de la diligencia de que trata el art. 12 de la Ley 1149 de 2007, al tenor de lo dispuesto en el art. 66 del CPTSS; de manera que procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante en los estrictos términos indicados en la audiencia, y de conformidad con lo previsto en el art. 66A del CPTSS, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si los extremos temporales de la relación laboral que ató a las partes son distintos a los que fijó la *a quo*.

Al efecto la Sala estudiará el caudal probatorio allegado, y para ello conviene precisar que realizando el análisis de las pruebas recaudadas, según los arts. 60 y 61 del CPTSS, el juez está facultado para dar más credibilidad a unos medios probatorios que a otros, concretamente, en aquellos casos en que respecto de una misma situación, exista un número plural de pruebas que se contraponen, es decir, que ante eventualidades que sean contradictorias, el juzgador está habilitado para formar libremente su convencimiento con aquellas que lo persuadan más sobre cuál es la verdad real, y no simplemente formal que resulte del mismo, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio, y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo, en pro de fundar sus decisiones en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente, o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo decidido, la existencia de deficiencias en la apreciación probatoria, o la violación de un derecho fundamental (CSJ SL8949-2017).

En el presente caso, no fue objeto de discusión que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido que inició el 1º de julio de 2020 y culminó el 30 de enero de 2021, tiempo en el que el demandante

desempeñó oficios varios en el Fruver La 54 de propiedad de John Mario Gómez Aristizábal, pues así lo declaró la *a quo*, y se probó con el contrato, el certificado de matrícula mercantil de persona natural, el reporte de semanas cotizadas en pensiones, los recibos de pago y la liquidación de prestaciones sociales que aportaron las partes (págs. 9- 15, 22, 23, 29-31 arch. 3, págs. 2- 8 arch. 17 C01), motivo por el cual no se equivocó la juzgadora de instancia al fijar los extremos temporales de dicho vínculo en las mencionadas fechas, dado que el actor no acreditó la prestación de servicios con anterioridad al 1º de julio de 2020 y después del 30 de enero de 2021.

Se afirma lo anterior porque si bien el art. 24 del CST estableció una presunción legal en cuanto a que toda relación de trabajo personal se encuentra regida por un contrato de trabajo, le corresponde simplemente a quien alega la existencia de éste, acreditar la prestación del servicio personal y a quien se considera el presunto empleador, derruir tal presunción, desvirtuando la existencia de los demás elementos esenciales del contrato de trabajo enunciados en el art. 23 ídem (CSJ SL10546-2014, CSJ SL10118-2015 y CSJ SL1420-2018).

No obstante, no se puede olvidar que nuestra legislación procesal ha instituido una serie de obligaciones, derechos, facultades y cargas atribuibles a todos aquellos que forman los distintos extremos que componen la relación jurídico-procesal, por lo que la persona que pretenda acudir ante la administración de justicia en calidad de demandante debe conocer como mínimo, las responsabilidades propias de su condición, lo que se hace necesario para imprimir una mayor seriedad, diligencia y presteza a todos los asuntos conocidos por la jurisdicción.

De manera que no bastaba con que el demandante afirmara en el libelo introductor que el nexo contractual tuvo vigencia entre el 15 de mayo de 2019 y el 15 de febrero de 2021, con el argumento de que presuntamente el demandado quiso ocultar el vínculo con anterioridad al 1º de julio de 2020 tras la firma del contrato de trabajo, sino que debió demostrar en juicio que en verdad ejecutó esos oficios varios en el Fruver La 54 de propiedad del demandado antes de esa fecha, carga probatoria que corría en cabeza de él, al tenor de lo dispuesto en los arts. 164 y 167 del CGP, pero no la cumplió (CSJ SL del 29 sep. 2005 rad. 24450, CSJ SL del 2 jul. 2008 rad. 24450, CSJ SL del 6 sep. 2012 rad. 37804 y CSJ SL del 20 mar. 2013 rad. 45120).

Al ser interrogado el demandante en relación con relación a si posee algún documento en el que se certifique que había laborado para el demandado desde el 15 de mayo de 2019, sostuvo que el papel con el que se constata tal hecho es donde se encuentran las cotizaciones de semanas en seguridad social, donde afirmó que se encuentra registrado el demandado como su empleador desde el año 2019.

Sin embargo, se precisa que la jurisprudencia ordinaria laboral, ha sido clara en establecer que la afiliación a la seguridad social o el pago de los aportes al sistema, no conlleva, en principio, la existencia de una relación laboral, a menos que existan pruebas contundentes que así lo acrediten (CSJ SL16528-2016), y que la misma es un elemento indiciario para acreditar tiempo y extremos temporales de una relación laboral, pero no es plena prueba de la misma (CSJ SL del 15 mar. 2011 rad. 37067), de ahí que la *a quo* no haya incurrido en yerro al valorar la historia laboral expedida por Protección SA (págs. 2-15 arch. 3 C01), pues el demandado solo registró aportes a pensión para los períodos comprendidos entre agosto y octubre de 2020, es decir, con posterioridad a haberse suscrito el contrato de trabajo que fue aportado; y con fechas anteriores, simplemente obran cotizaciones para los períodos abril a julio de 2020 bajo la razón social de Camilo Andrés López Henao y solo un día para marzo de 2020 bajo el nombre de Mónica Ocampo Duque, respecto de quien también se allegó una constancia del 30 de abril de 2021, de la que se observa que ella tuvo afiliado al demandante como dependiente suyo entre el 1º de mayo de 2019 y el 1º de marzo de 2020 en la ARL Sura (pág. 1 arch. 17 C01).

Frente a ello, el apelante sugiere que Mónica Ocampo Duque era una de las personas de entera confianza del demandado, y que por esa razón, ella misma era la encargada de efectuar los aportes a seguridad social, para lo cual se apoya en la manifestación efectuada por los testigos Sebastián Holguín y Anderson Velásquez; no obstante, en el interrogatorio de parte el accionado señaló que el establecimiento de comercio Fruver La 54 era solo suyo y no compartía la propiedad con nadie, lo que se constata con el certificado de matrícula mercantil de persona natural aportado por el demandante (págs. 29-31 arch. 3 C01), y agregó que nunca le pagó la seguridad social a sus empleados, incluyendo al actor, a través de otra persona, y que no conoce a Mónica Ocampo, sin que se le hubiera formulado por parte del interesado

alguna otra pregunta contundente con el fin de obtener confesión en relación con la prestación de servicios con antelación al 1º de julio de 2020, en la legumbrería de su propiedad.

Ahora, en la cláusula 9ª del contrato de trabajo que firmaron las partes el 1º de julio de 2020 se estableció que tal documento *«reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado por las partes con anterioridad»* y además de ello, se dejó claro que la fecha de inicio de las labores sería en esa data (págs. 2, 3 arch. 17 C01); frente a este documento se debe advertir que el demandante en su interrogatorio de parte admitió haber impuesto su firma en él [mins. 16:49 a 17:04 arch. 30].

Y si bien el testigo Sebastián de Jesús Holguín Piedrahita, solicitado por la parte actora, sostuvo que inició a laborar en el Fruver de la 54 el 28 de agosto de 2018 y que Deguis Ocampo fue su compañero de trabajo, 8 meses después de él porque empaquetaba los productos, hacía domicilios y era surtidor contratado por el demandado, no es posible aplicar la teoría de la aproximación de los extremos temporales de una relación laboral, relacionada con que los operadores judiciales pueden fijar este tipo de límites cuando se tenga seguridad sobre la prestación del servicio en un período determinado, con miras a no sacrificar los derechos laborales o sociales que le corresponden al trabajador (CSJ SL905-2013, CSJ SL2696-2015, CSJ SL16110-2015, CSJ SL17430-2017); porque dicho declarante no supo indicar fechas aproximadas de la presunta iniciación del vínculo contractual, ya que al preguntársele con ahínco por la *a quo* y los apoderados de las partes, respecto a los motivos por los cuales recordaba con exactitud que 8 meses después de su ingreso el demandante había empezado a laborar, sostuvo que aunque no sabe la fecha en día, mes o año aproximados, recuerda ello porque él observó toda esa información en la historia laboral del demandante, lo que como se vio, no es cierto.

Y en todo caso, tal y como lo sostuvo la *a quo*, esta resulta la única prueba de la cual se podría eventualmente sustraer la hipotética prestación del servicio por parte del actor, con anterioridad al 1º de julio de 2020, empero, no se aportó otro medio probatorio, ni existe algún elemento indiciario que pudiera reafirmar tal situación, como tampoco es posible confirmar del solo dicho del testigo que Mónica Ocampo Duque, pudo haber sido alguna intermediaria utilizada por el demandado para efectos exclusivos de tramitar la afiliación de

sus trabajadores en su propio nombre, pues aunque el declarante alegó conocerla, no sabía si le daba alguna orden o instrucción al demandante.

Nótese además que no adujo de manera específica cuáles fueron las funciones que pudo haber desempeñado el actor con anterioridad al 1º de julio de 2020 en un horario distinto al indicado en el libelo, y relató que, aunque su contratación fue verbal y que posteriormente en dicha data, firmó un contrato de trabajo sin que le entregaran recibos de pago, no le constó la forma cómo Deguis Ocampo se vinculó con John Mario Gómez, ni supo si al demandante le pusieron a firmar algún contrato y agregó «no sé cómo cuadrarían con los demás compañeros», lo cual desvirtúa totalmente lo indicado por el apelante en relación con el extremo temporal inicial alegado en la demanda.

En lo que tiene que ver con el extremo final del vínculo basta decir que el testigo Sebastián Holguin, sostuvo que el actor laboró junto con él hasta el 15 de febrero de 2021, ya que ambos se dieron cuenta de que el demandado no les estaba efectuando las cotizaciones de la seguridad social y por tanto, los dos tienen una liquidación firmada con esa fecha, lo que tampoco es cierto o por lo menos dentro del expediente no obra prueba de ello, porque la liquidación del demandante es de otro día.

Además, el demandado en su interrogatorio de parte sostuvo que Deguis Ocampo le renunció verbalmente el sábado 30 de enero de 2021 sin indicar nada, y que por esa razón, efectuó la liquidación que aportó con la contestación; y, aun cuando el aceptó el hecho de haber recibido un documento por parte del demandante en donde decía que renunciaba por incumplimiento de parte del empleador, lo cierto es que sostuvo que ese documento le fue entregado el 15 de febrero siguiente, que es justamente el aportado con la demanda titulado “*carta de renuncia motivada*” con constancia de entrega por correo certificado en esa fecha y dirigida a John Mario Gómez Aristizábal y a Miriam Rocío Aristizábal Ossa (págs. 25-28 arch. 3 C01), es decir, luego de haberle efectuado la liquidación allegada con la contestación de la demanda, que se encuentra firmada por el actor y en donde se indicó cómo período a liquidar 210 días comprendidos del «01/07/2020 al 30/01/2021» (pág. 4 arch. 17 C01).

La firma impuesta por parte de Deguis Ocampo en esa liquidación fue admitida como suya en el interrogatorio de parte [mins. 14:15 a 14:34 arch. 30 C01], razón por la que no es posible jurídicamente aceptar que el apelante manifieste ahora que no sabe leer ni escribir y que, por esa razón, pudo haberse visto comprometido u obligado a firmar tal documento, porque, por una parte, en sus generales de ley no advirtió ese aspecto, tampoco desconoció el escrito dentro del término procesal oportuno al tenor de lo dispuesto en los arts. 269 a 272 del CGP y, por otra parte, en ninguno de los hechos en la demanda alegó haber sido presa de algún vicio en el consentimiento al momento de la suscripción de la mentada liquidación y mucho menos, del contrato de trabajo, en el cual también reveló haber impuesto su rúbrica; de manera que tal argumentación resulta totalmente extemporánea, sin que pueda efectuarse respecto a ella mayor análisis, dado que ello conllevaría a vulnerar los derechos al debido proceso, defensa y contradicción, de los cuales es titular la demandada.

A lo anterior se agrega que, de los recibos de pago aportados por el demandado y que también tienen la firma impuesta del demandante (págs. 5-8 arch. 17 C01), ninguno contiene una fecha anterior a julio de 2020 ni posterior al 30 de enero de 2021, admitiendo éste en su interrogatorio de parte que esa sí es su rúbrica, y que cada 15 días le hacían firmar tales colillas que tienen como conceptos cancelados el salario y el subsidio de transporte, junto con los descuentos por EPS y AFP [mins. 14:34 a 16:50 arch. 30 C01], con las que tampoco se acreditó la prestación personal y continua de servicios hasta el 15 de febrero de 2021.

Por lo demás, ha de indicar la Sala que no goza de mérito probatorio la declaración de Anderson Velásquez Cano, pues basta señalar que, si bien indicó que fue compañero de trabajo del demandante en el Fruver de la 54 - Legumbrería, no supo exteriorizar las fechas en que ello ocurrió, aunado a ello, como informó que con posterioridad la prestación de sus servicios como Cajero se ejecutó para un empleador distinto al demandado, en otro establecimiento de comercio que queda al frente del local del demandado, el supermercado, para lo cual firmó contrato con Miriam Aristizábal el 1º de julio de 2020 y su vínculo laboral terminó antes que el del demandante, no pudo haberle constado de manera directa al tenor de lo dispuesto en el art. 221 del CGP las circunstancias que relató respecto de la supuesta prestación de servicios del demandante desde mayo de 2019 para barrer y trapear el Fruver, sino que

resultó ser un testigo de oídas porque al haberse retirado con anticipación, el demandante le contó varias cosas y él solo presume que así sucedieron.

En todo caso, en gracia de la discusión, tal y como se observa en el video de su testimonio, Anderson Velásquez fue requerido en muchas ocasiones por la juzgadora de instancia con el fin de estar atento a responder rápido las preguntas efectuadas y no consultar documentos que le pudieran inducir sus respuestas, frente a lo que el declarante manifestó que se demoraba porque se encontraba nervioso y por ello no recordaba las fechas [mins. 34:59 y ss arch. 30], lo cual de ninguna forma torna espontáneos sus relatos titubeados y afecta totalmente el deber de imparcialidad con el cual ha debido rendir su declaración (art. 211 de CGP), máxime que incurrió en varias contradicciones e incoherencias en sus dichos, relacionados justamente con las fechas indicadas; y, adicional a ello, no coincidió el horario indicado presuntamente cumplido por el demandante, con el que él mismo dijo en el libelo introductor, ni con el indicado por el otro testigo. De manera que tal declaración debe ser desechada.

Así las cosas, en ningún yerro de análisis probatorio incurrió la *a quo*, quien valoró todas las pruebas al tenor de lo dispuesto en el art. 61 del CPTSS para anclar los extremos temporales de la relación laboral que declaró entre los contendientes; en consecuencia, se **confirmará** la sentencia apelada.

Costas a cargo del recurrente. Se fija como agencias en derecho el equivalente a la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente para esta anualidad.

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada proferida el 28 de junio de 2022 por el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Itagüí -Antioquia, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Costas como se indicó en la parte motiva.

TERCERO: Esta sentencia se notificará a través de **EDICTO**,
atendiéndose los términos previstos en el art. 41 del CPTSS.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada ponente



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
Magistrada

(*) Hipervínculo de consulta de expediente digitalizado:

<https://etbcsj->

[my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des17sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/Ev7ku2XZWPZA
ngtZ3k81ywEB3uhMi-Su7T8-x4OSfYdqIQ?e=DY2vK6](https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des17sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/Ev7ku2XZWPZAngtZ3k81ywEB3uhMi-Su7T8-x4OSfYdqIQ?e=DY2vK6)

Firmado Por:

Luz Patricia Quintero Calle

Magistrada

Sala 017 Laboral

Tribunal Superior De Medellín - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **60ea3cf721044978f0a17194d1fb617092d09afd717d7b34c1aa1238e1807859**

Documento generado en 11/12/2023 01:53:48 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>